



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

///doba, 9 de Noviembre de 2023.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"BOLDU, FERNANDO ENRIQUE S/ INFRACCIÓN ART. 303" (EXPTE N° FCB 1554/2022)**, venidos a conocimiento de la Sala B del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el doctor Gustavo Daniel Franco, en representación de Enrique Boldú, en contra de la resolución dictada con fecha 8 de julio de 2022 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso: **"I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA** de Fernando Enrique Boldú, ya filiado, como supuesto autor del delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1° del Código Penal), por el cual fuera oportunamente indicado, conforme art. 306 y 310 del C.P.P.N. **II. TRABAR EMBARGO SOBRE LOS BIENES** de Fernando Enrique BOLDU, hasta cubrir la suma de treinta millones de pesos (\$30.000.000), o en su defecto, inhibirlo de la libre disposición de los mismos".

Y CONSIDERANDO:

I. Los presentes autos llegan a estudio del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el doctor Gustavo Daniel Franco, en representación de Enrique Boldú, en contra de la resolución precedentemente transcripta.

II. En la resolución mencionada, el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba dispuso el procesamiento del imputado como supuesto autor del delito de lavado de activos.

Para así decidir, sostuvo que analizadas las presentes actuaciones existen suficientes elementos de convicción para tener acreditado el hecho de lavado de

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

activos como la responsabilidad de Fernando Enrique Boldú en el mismo.

En primer lugar, manifestó que la efectiva incautación de los dólares estadounidenses se encuentra demostrada a través del acta de procedimiento de fecha 27.08.2014, labrada con motivo del allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal n° 1 en autos "RODRIGO, Eduardo Daniel y otros -Asociación ilícita".

Así entre las cajas de seguridad que se procedieron a abrir ese día, se hallaban dos a nombre del imputado, la n° 38 y la n° 49, esta última alojaba la suma de doscientos noventa mil dólares, acondicionados en 29 fajos de U\$U 10.000, todos billetes de cien dólares.

Agregó que por un error material el Sr. Fiscal Federal Dr. Enrique Senestrari, en el requerimiento de instrucción de fs. 1157/8, detalló que la suma de doscientos noventa mil dólares fue hallada en la caja de seguridad n° 38, en vez de la n° 49, tratándose el mismo de un simple error material subsanable, ya que ambas cajas de seguridad estaban a nombre de Fernando Enrique Boldú.

Ante dicho hallazgo el juzgado por ese entonces a cargo de la investigación formó Legajo de apelación y requirió a la Administración Federal de Ingresos Públicos que informara si el imputado había exteriorizado en sus declaraciones juradas de Impuesto a los Bienes Personales y/o Ganancias y ordenó la apertura de una fiscalización a los fines de establecer el origen de tales fondos.

En virtud de la inspección ordenada, el día 5.11.2015 compareció el encartado Fernando Enrique Boldú, quien fue atendido por el inspector Daniel Horacio Jaime, donde el imputado expresó que adicionalmente a la documental aportada con anterioridad, respecto de los

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

bienes que incluyó en sus declaraciones juradas de los períodos 2013 y 2014, aportaba documentación complementaria que justificaba su tenencia, entre ellos, la suma de dólares estadounidenses trescientos mil (U\$U 300.000). Exhibiendo ante el inspector el original y copia de las fojas 65 y 66 del expediente judicial caratulado: "BOLDU, Roberto Antonio- Declaratoria de Herederos", de las cuales se desprende que Fernando Enrique Boldú se presentó con fecha 6.6.2006 ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Río Segundo a fin de informar los bienes que integran el patrimonio del causante, entre los cuales se encontraba la suma de dinero antes indicada.

El instructor agregó que no pudo determinarse si Fernando Enrique Boldú, antes de la incautación de los dólares en la caja de seguridad de CBI, habría declarado dicha suma como perteneciente a la herencia de su padre, ya que ni durante su cargo como Secretario de Asuntos Institucionales, Regionales y Legislativos del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de Córdoba ni cuando fue intendente de la ciudad de Laguna Larga presentó declaraciones juradas. Lo que sí pudo verificarse, es que el imputado Boldú ante el ente recaudador (AFIP-DGI), antes del procedimiento en CBI no habría exteriorizado dicha suma de dinero en sus declaraciones juradas impositivas.

Por ello, concluyó que Fernando Enrique Boldú recién manifestó ante la AFIP-DGI, la suma de trescientos mil dólares en su declaración jurada de Bienes Personales una vez que el Juzgado Federal N° 1 ordenó su fiscalización.

Por otra parte, el Magistrado sostuvo que si bien el dinero es un objeto fungible, le resultaba muy llamativo que de los veintinueve fajos de billetes de cien dólares

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

incautados, doce contenían billetes serie 2006 con numeración correlativa cuando el causante, el Sr. Roberto Antonio Boldú, falleció con fecha 9 de julio de 2000.

Expuso que el delito de lavado de dinero o activos se define como la conversión de dinero ilegítimo en activos -ya sea monetarios o no- con apariencia legal.

Agregó que el dinero hallado en la caja fuerte habría sido "convertido" como proveniente del acervo sucesorio del causante Roberto Antonio Boldú, cuando en realidad, resulta probable que su origen provenga de una actividad ilícita, tal como mencionó el Fiscal Federal en la requisitoria cuando hace referencia a los precedentes.

Así, para darles apariencia de licitud a los dólares incautados habrían sido presuntamente declarados en el juicio sucesorio -lo cual no pudo ser comprobado- y tal circunstancia, expuesta ante los funcionarios de la AFIP, a los efectos de acreditar su presunto origen lícito.

Por ello y teniendo en cuenta que la suma incautada superaba ampliamente el monto de trescientos mil pesos (\$300.000) previsto como tope por el inciso 1° del art. 303 del Código Penal, el instructor ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado.

En lo que respecta a la libertad del imputado, el juez de grado dispuso el mantenimiento de la misma atento a no advertir factores de riesgo procesal que permitan suponer que el mismo intentará fugarse o entorpecerá la investigación, tal como no lo ha efectuado hasta el momento.

Finalmente, ordenó el embargo sobre los bienes del imputado a los fines de garantizar la eventual pena pecuniaria prevista para el ilícito de lavado de activos

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

que se le endilga por la suma de pesos treinta millones de pesos (\$30.000.000).

III. Con fecha 26 de julio de 2022 el abogado defensor de Fernando Enrique Boldú, doctor Gustavo Daniel Franco, presentó recurso de apelación en contra del mencionado decisorio.

En primer lugar, expuso la excepción de falta de acción y violación al principio de reserva: "...nadie puede ser juzgado ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso".

Así, sostuvo que el Requerimiento de Instrucción que da base al auto impugnado, carece por completo de sustento jurídico y no puede prosperar por estar ausente la necesaria acción penal.

Continuó diciendo que la norma represiva que se pretende aplicar al caso, es decir el art. 303 inc. 1 del C.P, no se encontraba vigente al momento en que se le atribuye a su defendido haber cometido la conducta punible.

En segundo lugar, adujo la atipicidad de la conducta atribuida en la resolución atacada dado que la misma no encuentra adecuación típica en la descripción del art. 303 inc. 1 del CP, ni en ninguna otra figura reglada en dicho cuerpo normativo.

Arguyó que conforme la plataforma fáctica, ni haber alquilado una caja de seguridad en dependencias de la ex financiera CBI CORDUBENSIS SA, ni haber permitido que los "supuestos" responsables del ilícito precedente guardasen una determinada suma de dinero puede interpretarse como una acción típica del delito de lavado de activos.

Concluyó que el solo hallazgo de dinero en una caja de seguridad sin ninguna otra particularidad resulta

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

total y absolutamente atípico, no solo para el pretendido encuadramiento en la figura de lavado de dinero, sino para cualquier otro tipo penal como por ejemplo evasión tributaria.

En tercer lugar, señaló la defectuosa y arbitraria valoración de la prueba indiciaria. Manifestó que la resolución que se cuestiona decide sobre “ficciones” y no en base a “presunciones jurídicas”.

En el presente caso, manifestó, se presume: que Eduardo Acastello cometió supuestamente un ilícito como Presidente del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (ENINDER) en el período 09 al primer semestre de 2012, que habría utilizado la Caja de Seguridad contratada por el imputado porque estaba autorizado para ocultar el supuesto provecho obtenido y luego, que el imputado Boldú “habría simulado” que los fondos depositados provenían del acervo hereditario de su padre. Y que para ello “habría confeccionado o hecho confeccionar” un escrito dirigido al Tribunal donde tramita el sucesorio de su padre con la posible participación de un empleado o funcionario del juzgado, y “habría insertado o hecho insertar” una leyenda “ptado hoy 06/06/06, con firma ilegible y sello del juzgado.

Agrega que ninguno de ellos es un hecho probado a partir del cual pueda aplicarse alguna presunción.

En cuarto lugar, se agravio por entender que en la resolución apelada se deja de lado y se cuestiona la existencia de una prueba dirimente como lo es el escrito presentado en el juzgado de la sucesión, con intervención de ese tribunal lo que lo convierte en un instrumento público, sin que en ningún momento se haya declarado que la

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

leyenda inserta en el escrito, la firma y sello del Juzgado Civil sean falsos.

No hay ninguna investigación dirigida a la declaración de invalidez de dicho instrumento. El documento público tendrá toda la fuerza de auténtico hasta que una sentencia se pronuncie por su falsedad. Pese a ello, pese a la legislación y jurisprudencia unánime en tal sentido, la resolución apelada deliberadamente ignoró su consideración.

Igualmente, sostuvo que se omite valorar en forma correcta la fiscalización e Informes Finales elaborados por AFIP-DGI, ordenados por el propio tribunal interviniente, así como las declaraciones testimoniales del supervisor Nelson Turrín y del inspector Daniel Horacio Jaime de AFIP, que en forma categórica concluyen en que Fernando Boldú acreditó la legitimidad del origen y la tenencia de los U\$U 290.000 hallados en la caja de seguridad.

Agregó que sólo la arbitrariedad manifiesta que se advierte en el decisorio impugnado permite dejar de lado prueba concluyente y categórica, que exime de toda responsabilidad penal al imputado. Y más grave aún es que esta prueba es ignorada sin argumentación alguna.

En quinto lugar, planteó la violación de la garantía constitucional y convencional del plazo razonable, aduciendo que la sola lectura y vista del expediente demuestra que se han violado palmariamente e incumplido todos los plazos establecido por la ley ritual. Los plazos no son meramente ordenatorios ni una expresión de deseos, pues si así se los interpreta no serían plazos ni por ende, límites al poder persecutorio del Estado.

En sexto lugar, sustentó la nulidad del allanamiento y secuestro de los dólares hallados en la caja de seguridad, considerando que no es suficiente para

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

motivar un acto en el que se dispone invadir una dependencia protegida por garantías constitucionales, como se pretende en estos autos, "haber tomado conocimiento" de otra causa en la su defendido no tienen ninguna vinculación.

En séptimo lugar, apuntaló la violación del secreto fiscal, aduciendo que la resolución que se cuestiona intenta fundar el procesamiento de su defendido en prueba obtenida mediante la violación del secreto fiscal del imputado, como lo ordena la normativa de procedimiento fiscal.

En el caso de autos, manifestó que no existió por parte del Fiscal o del Juez interviniente una orden fundada de levantamiento del secreto fiscal, lo que acarrea la nulidad de todo lo actuado a partir de tal circunstancia procesal.

En octavo lugar, refirió la omisión de valorar hechos públicos y notorios que demuestran acciones contradictorias del Estado para con su ahijado procesal ya que el tribunal ha ignorado hechos y acciones judiciales que ponen en evidencia que el Estado Nacional (a través de su órgano judicial) por una parte cuestiona o reprocha a Boldú la supuestamente delictiva tenencia de la suma de dinero hallada y por otra inicia varios juicios contra él persiguiendo el cobro de impuestos por la tenencia de ese dinero.

En noveno lugar, sostuvo la ausencia total de valoración o referencia al dolo directo que exige la figura penal que se pretende aplicar.

Por último, adujo en forma genérica la contradictoria, arbitraria o inexistente fundamentación con relación a la acreditación del hecho atribuido y la

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

defectuosa motivación con relación a la calificación legal dada al hecho que estima acreditado.

Atento encontrarse en discusión garantías constitucionales formuló reserva de ocurrir en Casación y ante la CSJN por vía del Recurso Extraordinario.

IV. Con fecha 17 de agosto de 2022, la defensa técnica de Fernando Enrique Boldú presentó el informe correspondiente al art. 454 del CPPN, a cuyos fundamentos se remite el Tribunal por cuestiones de brevedad (fs. 1219/1256).

V.- A su vez, el doctor Leandro Ariel Ventura, apoderado de la Unidad de Información Financiera, contesto los agravios deducidos por la parte recurrente de conformidad a lo prescripto por el art. 454 del CPPN, a los cuales me remito en honor a la brevedad (ver. fs. 1257/1261).

VI.- Resumidas en los precedentes párrafos las diferentes posturas, cabe ahora introducirse propiamente en el estudio del recurso de conformidad al orden de votación establecido en autos -fs. 1262-.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Liliana Navarro y Eduardo Avalos, dijeron:

I.- Examinadas las constancias del expediente, en particular los criterios expuestos por el Juez Federal interviniente en la resolución apelada y por el recurrente en su escrito de apelación e informe realizado ante esta Alzada, corresponde a los Suscriptos decidir si el procesamiento dispuesto por el Juez Federal de primera instancia en contra de Fernando Enrique Boldú en relación al delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1° del Código Penal), en carácter de autor, resulta o no ajustado a derecho.

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

En orden a los concretos agravios expuestos por la defensa técnica del imputado y por razones de orden metodológico, en primer lugar, abordaremos la cuestión relacionada a la falta de acción, luego los planteos de nulidad formulado por falta de fundamentación en relación al allanamiento y la violación del secreto fiscal, para después expedirnos sobre la situación procesal del imputado.

II.- Nulidades

La nulidad es una sanción procesal de orden excepcional, que está llamada a ceder ante los principios de conservación y trascendencia, en pos de la preservación del proceso frente a cuestiones de mera forma que no impliquen una afectación real de las reglas del debido proceso.

A propósito de la temática, es preciso tener presente la necesidad de limitar la nulidad solamente a los casos expresamente previstos por la ley procesal -art. 166 del CPPN-. En atención a la evidente gravedad de tal sanción, el ordenamiento jurídico-procesal, impone un criterio de interpretación restrictivo en materia de nulidades.

En efecto, dicho cuerpo adopta un sistema legalista en esta materia, de modo tal que no basta cualquier irregularidad procesal para invalidar un acto, pues para lograr ello debe presentarse una seria inobservancia de las formas y de los requisitos sustanciales previstos por la propia ley adjetiva.

En tal sentido, es preciso remarcar que el instituto de las nulidades procesales tiene en mira resguardar el debido proceso y la defensa en juicio, resultando improcedente declarar la nulidad por la nulidad

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

misma, exigiéndose la existencia del perjuicio. Es así que, por trascendente que pueda ser el vicio, aquél no puede ser presumido sino que se debe contar con algún elemento que permita vislumbrar en cierto grado su concreción.

a) Nulidad del allanamiento.-

En lo que concierne al planteo de nulidad del allanamiento efectuado por el recurrente, es preciso señalar que la resolución dictada por el entonces Juez Federal N° 1 de Córdoba, de fecha 26.8.2014 que ordenó el allanamiento de determinadas cajas de seguridad en el domicilio de la firma CBI Cordubensis en calle Rodríguez del Busto 4086, se halla debidamente motivada, en los términos de los artículos 224 y 123 del CPPN.

Es sabido que las resoluciones judiciales deben ser fundadas, según lo dispone la ley procesal.

Esta exigencia, que queda plasmada en la exigencia del recaudo de motivación como pauta de validez de todo pronunciamiento, es soporte fundamental de la garantía del debido proceso.

Se trata de un requisito indiscutible de validez de las sentencias judiciales que se traduce en el imperativo de que ellas constituyan una derivación razonada del derecho vigente, sobre la base de una aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa.

La carencia de motivación resulta descalificada por el vicio de nulidad. Igual consecuencia conlleva la sentencia con fundamentos insuficientes, o bien aquella que se sustenta en consideraciones meramente dogmáticas, que no tiene en cuenta las circunstancias que fueron demostradas en la causa.

Más específicamente, una orden de allanamiento sólo puede ser válidamente dictada cuando median elementos

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable de que en el lugar podrían encontrarse elementos que prueben la comisión de algún ilícito penal.

Este legajo precisamente se produjo con motivo de la investigación iniciada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, entonces interviniente en la causa, en virtud de la presentación efectuada por personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos ante dicho Juzgado a fin de requerir la certificación de copias del contrato de locación de las cajas de seguridad nombradas "Capuchinos 38 y 49" -cuyo titular era Fernando Enrique Boldú y autorizado Eduardo Acastello- que se encontraban emplazadas en el local comercial de la firma CBI, sito en calle Rodríguez del Busto 4086 de esta Ciudad de Córdoba, las cuales fueron objeto de allanamientos ordenados en la causa "Rodrigo, Eduardo Daniel p.ss.aa Asociación ilícita y otros" (Expte N° 5650/2014) el 27 de agosto de 2014.

Según surge de dicho procedimiento, cuyas copias han sido agregadas al presente legajo, se secuestraron 290.000 dólares de la caja de seguridad n° 49, dinero que quedó a disposición del Magistrado interviniente para su resguardo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, surge que dicho registro fue válido dado que de las constancias de la causa existían elementos objetivos idóneos para fundar una sospecha razonable de que en el lugar podrían encontrarse elementos que probasen la comisión de algún ilícito penal.

A su vez, que el entonces Juez Instructor respaldó su decisorio esgrimiendo que: *"...en el transcurso de la investigación realizada por el sr. Fiscal Federal (art. 196 del C.P.P.N), se dispuso iniciar investigaciones por separado respecto a personas y empresas involucradas*

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

en la actividad que desarrollaba la firma CBI Cordubensis S.A. En consecuencia, y luego de haber tomado conocimiento de todas las investigaciones vinculadas a la causa principal (fs. 5841) se pudo establecer, prima facie, que resulta de aplicación al subexamine el supuesto que torna procedente las medidas requeridas, ello de conformidad a lo prescripto por los arts. 224 y s.s. del C.P.P.N, en tal sentido corresponde disponer el allanamiento y secuestro de todos los efectos, valores y documentos que pudieren encontrarse en las siguientes cajas de seguridad en el domicilio de la sucursal centro de la firma CBI Cordubensis S.A., sita en calle Rodríguez del Busto 4086 B° Alto Verde de esta ciudad (Dinosaurio Mall): ...8) Caja de Seguridad N° 38 (módulo Capuchinos) a nombre de Fernando Boldú... 10) Caja de Seguridad N° 49 (módulo Capuchinos) a nombre de Fernando Boldú".

Al respecto, nuestro más alto Tribunal sostuvo en autos "Torres" que "...el examen de un proceso exige a los jueces valorar la concatenación de los actos de acuerdo con la sana crítica racional y atendiendo a las reglas de la lógica, las que se verían alteradas de anularse un procedimiento por la supuesta falta de fundamentación del auto que ordena el allanamiento cuando, como en el caso, su respaldo está dado o puede encontrarse, en las constancias de la causa anteriores al mencionado decreto" (Fallos, 322:3225).

En cuanto a los criterios de los tribunales inferiores, cabe mencionar lo señalado por la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en causa "Llanos" (6.7.1998), según el cual los motivos, razones o fundamentos exigidos para la medida de allanamiento podrán surgir: "a) del propio decisorio, si el magistrado

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

desarrolla en el mismo decreto la argumentación sobre la cual reposa la medida; b) de otra pieza procesal a la cual el auto se remita en forma inequívoca, y de la cual surjan con claridad los fundamentos que lo avalan (...) y c) de las incontrovertibles constancias arrimadas al proceso con anterioridad al dictado del auto, siempre que de las mismas surja de forma indubitable la necesidad de proceder, o en otras palabras, que esta última sea una derivación lógica de lo actuado hasta el momento; una consecuencia categórica de probanzas colectadas con antelación, en lo que constituya un ejercicio racional y mesurado de poder que no afecte expresas disposiciones de rango constitucional que protegen el ámbito privado, que cuando se trata de la investigación de un ilícito penal están sujetas a ciertas limitaciones legales en función del interés común de un efectivo y oportuno servicio de justicia...”; a lo que se agregó que “cualquiera de las tres modalidades antes descriptas satisfacen el recaudo de ‘apoyar con motivos o razones eficaces’; y ello así (...) por cuanto exigir en todos los casos que el propio decreto explicita acabadamente sus fundamentos, deviene en un rigorismo formal excesivo, si las demás constancias hasta entonces arrimadas constituyen por sí solas razón suficiente del dictado de la medida” (criterio asimismo utilizado por la Sala en “Massolo”, 28.02.01, La Ley 2001-D; “Anzo”, 22.11.99; y con anterioridad por la Sala II en “Urquía”, 28.2.97). Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en causa “Oca” sostuvo “negar fundamentación a los allanamientos por el hecho de no haberse asentado lo que resultaba obvio, responde a una interpretación apegada a la letra de la ley con olvido de su finalidad y conduce a una conclusión arbitraria por

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

excesivo rigor formal..." (La Ley, 1997-E, p. 958, rta. 17.07.97, reg. 1682.1; asimismo en autos "Díaz", 20.02.98, reg. 2040.1).

En el caso de autos, consideramos que los recaudos antes mencionados han sido observados al momento de disponer el allanamiento y secuestro de los efectos, valores, documentos de alguna de las cajas de seguridad de la Financiera CBI, ya que realizó una apreciación de la petición efectuada del Fiscal Federal y de las constancias de la causa principal, considerando procedente la medida ordenada.

Cabe señalar al respecto, que no se allanaron todas las cajas de seguridad sino algunas puntuales cuyos titulares estaban siendo investigados por actividades que desarrollaba la firma CBI Cordubensis S.A.

Por ello, corresponde no hacer lugar al pedido de nulidad efectuado.

b). Violación Secreto Fiscal

El apelante señaló que la resolución que se impugna intenta fundar el procesamiento de su defendido en prueba obtenida mediante la violación del secreto fiscal del imputado, dado que no habría existido por parte del Fiscal o del Juez una orden fundada de levantamiento del secreto fiscal, lo que acarrearía la nulidad de todo lo actuado a partir de tal circunstancia procesal.

Agregó que la sola lectura del decreto obrante a fs. 23 de autos que se titula como levantamiento del secreto fiscal, permite colegir que no tendría tal alcance, ya que en ningún momento se motiva ni se le hace saber a dicha institución que se ha dispuesto el levantamiento del secreto fiscal que ampara a todos los ciudadanos. Por lo que la sola orden a AFIP-DGI de informar sobre datos

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

resguardados por el secreto fiscal, sin motivación alguna, manifiesta resulta nula de nulidad absoluta conforme lo resuelto por esta Cámara en autos "Lafuente Sivilotti, Matías Gonzalo y otros s/ Asociación ilícita".

Al respecto, queremos aclarar que en dicho pronunciamiento, la postura minoritaria (Dra. Liliana Navarro) propició la solución contraria, es decir que debía revocarse la resolución de fecha dictada por el juez, en cuanto disponía la nulidad de los informes remitidos por AFIP amparados en el Secreto Fiscal incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93, 121/151 de las presentes actuaciones y, en consecuencia, desglosarlos de la causa (conf. Art. 167 inc. 2, 168 primer párrafo del CPPN y art. 101, 3er párrafo de la ley 11.683). Como así también declara la nulidad de los actos que fueran su consecuencia.

En dicho precedente, la minoría (Dra. Liliana Navarro) sostuvo que: *"El secreto fiscal es aquella garantía destinada a resguardar toda información que el Fisco, es decir, el Estado en su calidad de organismo encargado de recaudar recursos económicos, posee de las personas en su condición de contribuyentes"*.

Sin perjuicio de ello, se señaló que *"los derechos reconocidos a toda persona, incluso los reconocidos por la Constitución, no son absolutos en razón de que el ejercicio de los mismos se encuentra restringido por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad"*.

Dicha postura resulto luego con fecha 27.12.2022 acogida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la resolución bajo el registro n° 1793/2022 (Expte N° FCB 70949/2018/19/CFC2).

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Así, el derecho a la intimidad tampoco puede considerarse un derecho absoluto, por cuanto está limitado por el propio ordenamiento jurídico, por el necesario respeto a los derechos de los demás y porque su valoración debe hacerse en cada caso concreto.

Ahora bien, toda investigación penal que realiza el Estado implica una restricción de las garantías individuales, la que debe realizarse del modo establecido por la ley, la normativa constitucional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, esto significa que la eficacia de la investigación penal no puede lograrse de cualquier manera, con una concepción bélica, donde todo vale.

Este es el mayor desafío al que se debe enfrentar la administración de justicia penal en una democracia: lograr simultáneamente la eficacia en una investigación y el resguardo de las garantías constitucionales vigentes.

No caben dudas que dichas averiguaciones y seguimientos, que se realizan en el marco de una investigación dirigida por un Fiscal o un Juez -dentro de las facultades que la ley les acuerda-, implican una restricción a la garantía de la intimidad de las personas consagrada en el art. 19 de la CN. Sin embargo, considero que ello se encuentra justificado en el deber del Estado de perseguir la comisión de ilícitos, a fin de lograr una adecuada administración de justicia para compensar debidamente el derecho de las víctimas del delito.

Traídos los lineamientos anteriormente expuestos al caso de autos, vemos que es el art. 101 de la ley 11.683 el que prevé que las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP son secretos y no serán admitidos como pruebas en

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

causas judiciales, salvo las excepciones que la propia ley establece, entre las que se encuentran “...las cuestiones de familia, los procesos criminales por delitos comunes cuando las informaciones en cuestión se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen en la causa, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros...”.

A su vez, resulta acertado traer a colación la Disposición 98/2009 de AFIP mediante la cual el organismo recaudador establece las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal, las que resultan de aplicación obligatoria a los fines del tratamiento de toda solicitud de información protegida por el instituto del secreto fiscal y alcanzan a todas las áreas de esta Administración Federal, que reciban, tramiten o contesten dichas solicitudes (art. 2).

Al efecto, establece que en el marco de causas judiciales -Punto 3.2.2.- corresponde suministrar dicha información únicamente cuando la misma sea requerida como prueba en los siguientes tres supuestos: Cuestiones de familia -Punto 3.2.2.1.-, Procesos criminales por delitos comunes (cuando haya una directa relación con los hechos que se investiguen) -Punto 3.2.2.2.-, Juicios en los que la solicitud sea efectuada por el interesado y sea parte contraria el Fisco Nacional, Provincial, Municipal o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que no se revelen datos de terceros -Punto 3.2.2.3.-.

En el caso que nos atañe, cabe recordar que fue el Instructor quien con fecha 25.8.2015 ordenó a AFIP-DGI que realizara una investigación a Fernando Enrique Boldú y

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

a Eduardo Acastello, a los fines de averiguar si podían justificar los dólares hallados y en virtud de ello se remitieron los respectivos oficios.

En efecto, consideramos que la remisión de un oficio o cualquier otro instrumento mediante el cual se comunica una medida que disponga un requerimiento de esta naturaleza, y conste la existencia de un proceso criminal, es suficiente para considerar a un requerimiento justificado, ya que son dichas constancias de la causa las que permiten al organismo recaudador corroborar si la solicitud encuadra o no en las excepciones previstas por la norma.

En consecuencia, si los requerimientos formulados en autos no hubieran sido considerados como excepciones a la regla, los funcionarios del organismo recaudador debieron haber rechazado las solicitudes de información, circunstancia que no se verificó en autos. Razón por la cual consideramos que no se encuentra violentado el derecho a la intimidad ni el secreto fiscal.

A más de ello, en virtud de lo dispuesto por el punto 5 de la Resolución 4242/2018 modificatoria de la Disposición N° 98/09, en cuanto incorpora como Apartado 6 del Anexo, en todos los casos en que se resuelva favorablemente un requerimiento de información amparado por el secreto fiscal, se dejará constancia de que el sujeto, órgano o autoridad receptor de la información deberá cumplir el deber de confidencialidad previsto en el segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Tributario.

Nótese así, que las distintas advertencias y/o alertas consignadas por los funcionarios de AFIP-DGI al contestar los oficios, respecto de la existencia de información amparada por el Secreto Fiscal en dichas

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

contestaciones, obedece a esta última previsión y no a la negativa de que dicha información sea utilizada como prueba en el presente proceso criminal.

En consecuencia, analizadas las constancias de la causa consideramos que lo actuado por el Instructor se ajusta estrictamente a las exigencias del Código de rito y de las normas sustanciales precedentemente referenciadas, no habiéndose vulnerado el secreto fiscal por lo que corresponde no hacer lugar a la nulidad planteada.

III.- Falta de Acción

En relación a la excepción de falta de acción planteada por la defensa, es preciso revisar algunos conceptos de índole general en torno a las excepciones que las partes pueden interponer en el proceso, a la luz de las prescripciones de nuestro C.P.P.N.

Es sabido que, por regla, el instituto de excepción constituye una defensa de carácter formal que puede oponerse al progreso de la acción, esto es, el remedio por el cual se resiste de manera provisional o definitiva la constitución o desarrollo del proceso, a fin de paralizarlo o extinguirlo.

Según doctrina autorizada, la excepción constituye "el derecho de impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de la relación procesal, denunciando algún obstáculo o deficiencia que se basa directamente en una norma de derecho y no incide sobre el hecho que constituye el objeto sustancial de aquélla" (VÉLEZ MARICONDE. "Derecho procesal penal". T. IV en TENCA, Adrián Marcelo. Excepciones en el proceso penal. Ed. Astrea. Buenos Aires. Pág. 33).

Puntualmente, nuestro Código Procesal en el artículo 339 establece que: "*Durante la instrucción, las*

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: ... 2) Falta de acción, porque no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser proseguida, o estuviere extinguida la acción penal".

Ahora bien, en el caso de autos, el recurrente ha centrado su fundamento en la configuración de un supuesto de atipicidad, ya que -a su entender- el art. 303 no resultaría aplicable por no haber estado vigente al momento del hecho endilgado a su defendido ni habría realizado ninguna de las conductas allí previstas.

Por falta de acción debe entenderse la ausencia temporal o definitiva del poder de ejercicio de la acción penal con relación a un proceso determinado. Las hipótesis comprendidas en el dispositivo anteriormente mencionado incluyen una serie de causales impeditivas: falta de acción en el acusador o sus representantes (el acusador carece de acción cuando no se encuentra, respecto del objeto procesal en concreto, en condiciones jurídicas de promover la persecución, también cuando la parte querellante carece de la suficiente capacidad jurídica); litis pendencia (el imputado se encuentra sometido a proceso por el mismo hecho); cosa juzgada (o ya ha sido juzgado por él) y prescripción.

De la lectura de autos surge que la defensa de Fernando Enrique Boldú ha intentado encausar, por vía de excepción una discusión que -en rigor legal- consideramos debe sustanciarse en el marco de la instrucción propiamente dicha, siendo aquel el escenario propicio para la discusión en torno al hecho y el análisis probatorio que la parte propone.

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Al respecto, la doctrina ha precisado que “... *por vía de excepción puede cuestionarse el fondo del asunto cuando la atipicidad del suceso denunciado sugiere, en forma manifiesta, de los términos de la querella [...], debe tener acogida favorable en aquellos casos en donde **aparezca palmariamente que el hecho denunciado resulta atípico*** (ALMEYRA, Miguel Ángel, Director, Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado, T. III, 2007, págs. 6-16).

Así, el recurrente plantea que la fecha de consumación del delito se habría producido el día 2.2.2011 fecha en que celebró el contrato de locación por el que se procedió a la apertura de la caja de seguridad y no el 30.12.2015 como sostiene el requerimiento de instrucción.

De tal modo, la discusión comprendida en el planteo defensivo excede los límites de la excepción articulada, al no versar sobre cuestiones jurídicas de tipo evidentes o palmarias, sino referir a las propias circunstancias temporales del hecho a la luz de las constancias de la causa y del derecho aplicable. Más aún, por la vía intentada el impugnante controvierte los extremos planteados por la acusación, objetando así sus términos.

Así, el análisis de autos nos conduce a concluir que la pretendida atipicidad penal del hecho investigado no surge ni manifiesta, ni evidente por lo que la pretensión articulada no puede tener acogida.

IV.- Plazo Razonable

En relación al plazo razonable planteado por el apelante, consideramos que el mismo debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Fallos 330:3640), que sostiene que el

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el art. 8° inc. 1° de la convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades en la conducción del proceso.

El tipo de conductas aquí investigadas involucran maniobras complejas, todas ellas tendientes a hacer desaparecer las huellas o rastros del dinero obtenido en forma ilícita por ser producto del delito.

V.- SITUACIÓN PROCESAL

Zanjada las cuestiones procesales, corresponde ahora ingresar al tratamiento del hecho que se endilga a Fernando Enrique Boldú.

Conforme se desprende de la requisitoria fiscal y su indagatoria, el mismo quedó fijado de la siguiente manera: ***"Precedentes: Informe AGN: Con fecha 29 de junio de 2016, la Auditoría General de la Nación, mediante resolución AGN/16 expuso los resultados de una evaluación realizada sobre la asignación, gestión y aplicación de fondos públicos nacionales transferidos o abonados por el Estado Nacional en forma directa al Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (ENINDER) en el período 2009 al primer semestre de 2012.***

Como consecuencia de éste, con fecha 25 de octubre de 2016, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 7 formuló requerimiento de instrucción en contra de, entre otros, Eduardo Luis Accastello (ex Intendente de la ciudad de Villa María y Presidente del ENINDER), Edgar Bernaus (Director del ENINDER) y Verónica Navarro Alegre (ex Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa María).

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Estas actuaciones se encuentran radicadas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se investigan sobrepagos pagados a las empresas Vialco S.A., Cinter S.A. y Tecnología y Construcciones S.R.L., para la remodelación del Anfiteatro de la ciudad de Villa María, la construcción del puente Villa María-Villa Nueva y las obras de pavimentación urbana y rural del mismo municipio con los fondos que el Estado Nacional habría girado al ENINDER.

Hallazgo de los dólares: Con fecha 20 de octubre de 2011, Fernando Boldú alquiló la caja de seguridad N° 38 del módulo "Capuchinos" en la ex financiera denominada CBI Cordubensis SA, autorizando a Eduardo Acastello al acceso a ésta.

Luego, en una fecha no determinada, Boldú, Acastello y/o Verónica Navarro habrían depositado en esa caja de seguridad, U\$S 290.000, provenientes de las maniobras delictivas investigadas en la causa señalada arriba.

Tiempo después, precisamente el día 27 de agosto de 2014, en el marco de la investigación que se inició a la financiera denominada CBI SA, caratulada "Rodrigo, Eduardo y otros s/ Asociación ilícita FCB 5650/2014" y como producto de un allanamiento efectuado en un local donde ésta funcionaba, se procedió a secuestro de los U\$S 290.000 que estaban en la caja de seguridad mencionada.

El Blanqueo del Dinero

Como consecuencia del procedimiento relatado antes, el día 25 de agosto de 2015, el Juez a cargo de la causa CBI ordenó a la AFIP que realice una fiscalización a Fernando Boldú y Eduardo Acastello a los fines de

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

averiguar si éstos podían justificar la tenencia de los U\$S 290.000 secuestrados.

En ese marco, y a los fines de darle una apariencia lícita al origen del dinero hallado, Fernando Boldú habría simulado que ese dinero provenía del acervo hereditario de su padre (fallecido), el Sr. Roberto Antonio Boldú.

Para ello, con fecha no determinada pero posterior al secuestro del dinero, Boldú habría confeccionado o hecho confeccionar un escrito dirigido al Juzgado en donde se tramitaría la declaratoria de herederos de su padre, al que encabezó como "HACE PRESENTE-INFORMA" y en él indicó falsamente que, entre los bienes que integraban el patrimonio de su padre había dinero en efectivo por la suma de U\$S 300.000.

Asimismo, y con la posible participación de un empleado o funcionario del Juzgado de Río Segundo aún no identificado, habría insertado o hecho insertar en el escrito la leyenda "Ptado hoy 06/06/06" con una firma ilegible y el sello del Juzgado.

Hecho esto, el día 5 de noviembre de 2015, Boldú se presentó ante el inspector de AFIP encargado de la fiscalización, le exhibió el original y aportó copia del documento falso para justificar el origen del dinero hallado en la caja de seguridad.

Así las cosas, con fecha 30 de diciembre de 2015 la AFIP, sumida en el error provocado por Boldú, remitió el informe de inspección encabezado "informe de estado de avance" en el que concluye que el contribuyente fiscalizado había justificado el origen y la tenencia de los U\$S 290.000 dólares hallados en la caja de seguridad."

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Plasmado ello, debemos decir que el art. 303 inc. 1, a diferencia de lo sostenido por el apelante, resulta ser la normativa aplicable, ya que la misma se encontraba vigente al momento en que se le atribuye haber cometido la conducta punible al encartado Fernando Enrique Boldú, ya que el mismo fue incorporado a través de la sanción de la Ley N° 26.683 (B.O: 21/6/11).

La fecha esgrimida por el apelante para aducir la falta de acción -apertura de la caja de seguridad-, no resulta ser la fecha en que se cometió el ilícito reprochado, ya que la conducta que se le reprocha a Fernando Enrique Boldú, es lavado de dinero, que se define como aquel proceso de ocultación de bienes de origen delictivo con el objeto de dotarlos de una apariencia final de legitimidad.

Dicha conducta, tal como lo manifestara el señor Fiscal en el Requerimiento de Instrucción habría ocurrido el día **30.12.2015**, fecha en la cual la AFIP-DGI emitió el dictamen justificando el origen de los fondos.

El señor Fiscal expuso: *"de acuerdo a la hipótesis planteada por esta fiscalía, el día 30 de diciembre de 2015 se consumó la maniobra perpetrada por Fernando Boldú para blanquear la suma de U\$U 290.000. La investigación llevada adelante pone en jaque la justificación intentada por Boldú e inmediatamente hace salir a la luz el siguiente interrogante: Si el dinero no proviene de la herencia de su padre ¿de dónde proviene?"*.

Cabe tener presente que el delito en cuestión consiste -en términos generales- en un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Doctrinariamente, en forma mayoritaria, se reconocen al menos tres etapas en el proceso de “lavado” de activos de origen ilícito. Una inicial o de “colocación”; luego la etapa de estratificación -donde se evidencian el mayor número de transacciones para disipar el rastro del dinero obtenido en forma ilegal-; y finalmente la “integración” que es el momento en que pueden disponerse los fondos dentro de un marco económico de apariencia legítima.

Conforme se encuentra legislado, las conductas típicas consisten en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes procedentes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito; agravándose la pena, en lo que al caso interesa, cuando el autor realizare el hecho como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de ésta naturaleza -art. 303, apartado 1) y 2), inc. a) del CP-.

Se trata de un delito doloso. Sobre el tema, se ha dicho *“...el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no implica que este debe “...saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrente sobre el caso...”. Asimismo, que “no es necesario el autor o quienes participan en un proceso de lavado, tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con que el autor sepa que con su acción puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel carácter...”* (causa “ORENTRAJCH”, CNCP, Sala I, 21/3/06).

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Definida así la base conceptual del tipo penal e ingresando al análisis de fondo sobre la procedencia o no del procesamiento por lavado de activos de origen delictivo atribuido al nombrado, consideramos por las razones que expondremos que corresponde revocar el procesamiento dispuesto por el instructor, debiendo ampliarse la investigación.

En este entendimiento cabe remarcar antes que nada, que la sala A de esta Cámara, en el voto de la minoría (Dr. Eduardo Avalos) emitido en los autos caratulados: **"BERNAVEI, Carlos Atilio y Otros s/ infracción art. 145 ter -conforme art. 2, Ley 26.842"** (Expte N° FCB 40696/2017/ca2), que remitió a su vez a los autos caratulados **"LEGAJO DE APELACION EN AUTOS: ANDRADA, Adrián por infracción Ley 23.737"** (Expte.: FCB 7125/2016/25/CA8)" postuló que: *"...el tipo penal en examen, regulado en el código de fondo junto aquellos que reconocen como bien jurídico tutelado el orden económico y financiero, involucra maniobras complejas, todas ellas tendientes a hacer desaparecer las huellas o rastros del dinero obtenido en forma ilícita por ser producto del delito. Ello ha llevado a la doctrina, en forma mayoritaria, a reconocer la existencia de al menos tres etapas en el proceso de "lavado" de activos de origen ilícito. Una inicial o de "colocación"; luego la etapa de "estratificación" -donde se evidencian el mayor número de transacciones para disipar el rastro del dinero obtenido en forma ilegal-; y finalmente, la "integración" que es el momento en que pueden disponerse los fondos dentro de un marco económico de apariencia legítima".*

"Por otra parte, en lo que aquí interesa especialmente resaltar, la norma legal que hoy atrapa el

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

delito -art. 303 del CP-, modificando su redacción anterior, exige que las acciones que allí se tipifican -convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación- tengan por objeto bienes procedentes de un ilícito, adscribiendo el suscripto a la posición doctrinaria y jurisprudencial, que aún con anterioridad a la reforma operada por la ley 26.683, considera que, de lo que se trata, es de constatar la existencia de un hecho ilícito, es decir, típico y antijurídico”.

A su vez que “La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva previa que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni los concretos partícipes en el mismo...” (Sala I, causa “Orentrajch, Reg. 8622, rta. 21/372006).”

“En definitiva, el juzgamiento del delito de lavado de dinero no requiere como condición necesaria la investigación, procesamiento o condena del ilícito precedente, en tanto “no se trata de una cuestión prejudicial, sino de un elemento del tipo cuya prueba, como la de todos los demás elementos del tipo, puede y debe ser resuelta por los jueces que juzgan el caso, máxime cuando ni siquiera hace falta la prueba precisa y circunstanciada de un hecho particular, sino de las circunstancias a partir de las cuales puede inferirse inequívocamente la procedencia ilícita de los bienes” (Córdoba, Fernando J., Delito de lavado de dinero, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2017, pág.154).”.

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

"A ello, cabe agregar que en razón de los obstáculos que presenta la pesquisa en delitos como el lavado de activos -por cierto complejos-, adquiere plena vigencia la utilización de prueba indiciaria, por caso, "...-como indicios salientes, y de particularidad significación probatoria- ...".

Hilvanando esta idea, recordemos que el señor Fiscal Federal de primera instancia, doctor Enrique José Senestrari, con fecha 8 de febrero de 2022 reformuló el requerimiento de instrucción que había elaborado con anterioridad, conectando los Doscientos noventa mil dólares estadounidenses (u\$s 290.000) encontrados en la caja de seguridad N° 38 del módulo "Capuchinos" en la ex financiera CBI Cordubensis S.A. (caja de seguridad a nombre de Fernando Enrique Boldú, autorizado Eduardo Luis Accastello) con un supuesto ilícito precedente consistente en supuestos sobrepagos abonados para la remodelación del anfiteatro de Villa María y demás obras, con fondos del Estado Nacional que se giró al ENINDER, cuyo Presidente era Accastello; Director, Edgar Bernaus y Verónica Navarro Alegre, Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa María. Dichas actuaciones se encuentra radicadas por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como lo señalamos anteriormente, dada la dificultad que presenta la reconstrucción de la verdad histórica en los delitos como el lavado de activos, la prueba indiciaria reviste una gran importancia y utilidad.

En el presente caso, para procesar al imputado Boldú el instructor ha considerado una serie de indicios que a nuestro juicio, de agotarse la instrucción, como

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

habremos de proponer, alguno de ellos podrían convertirse en una prueba positiva o negativa que acerque la investigación al plano de las certezas. Nos referimos concretamente al nudo central de esta causa, y en lo que se asienta la hipótesis delictiva del Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver con que Boldú para darle una apariencia lícita al dinero encontrado en su caja de seguridad, habría simulado que esos Doscientos noventa mil dólares (u\$s 290.000) provenían del acervo hereditario de su padre fallecido.

Sostuvo el Fiscal que para ello Boldú habría falsificado o hecho falsificar un escrito cuya copia en soporte papel figura a fs. 666 de autos, donde habría denunciado en el año 2006 que Trecientos mil dólares (u\$s 300.000) integraban el patrimonio de su padre.

Explicó además el Fiscal de primera instancia que, con la posible participación de un empleado o funcionario del Juzgado de Río Segundo, donde tramitó la declaratoria de herederos del causante, Boldú habría insertado o hecho insertar la leyenda **"Ptado hoy 06/06/06"** con una firma ilegible y el sello del Juzgado. A su vez, dicho documento sirvió de base para que la A.F.I.P. tuviera por justificado el origen y la tenencia de moneda extranjera por parte de Boldú al confeccionar las DD.JJ del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales 2013 y Bienes Personales 2014, lo que a la luz del testimonio rendido por el inspector de dicho organismo Daniel Horacio Jaime, a nuestro criterio, se tomó con cierta ligereza.

De ese modo, se advierte que la instrucción no está completa por cuanto si bien el Ministerio Público requirió como medida de prueba -entre otras- la nómina de empleados y funcionarios que se desempeñaron durante el año

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

2006 en el Juzgado Civil, Comercial, Concursal y Familia, Secretaría 2 de la ciudad de Río Segundo, a cargo de la Jueza Susana Esther Martínez Gavier y dicha información obra a fs. 929/931 vta. de autos, jamás se llamó a declarar a ninguna de las personas que figuran en ese listado ni tampoco se produjo pericial caligráfica que pudiera esclarecer la circunstancia apuntada en cuanto a el cargo inserto en el referido escrito que lleva como presentado el 06/06/06 y para de algún modo establecer su autenticidad. Y reiteramos, la determinación de la autenticidad o no de ese documento es la premisa mayor de cualquier resultado al que se pudiera arribar por cuanto de ser auténtico caería la hipótesis delictiva esgrimida por el señor Fiscal y de resultar apócrifo, caería la hipótesis exculpatoria que se basa justamente en la declaración de A.F.I.P. que tuvo por justificado el origen y tenencia de los fondos.

Sin perjuicio de lo expresado, subsisten otras incertidumbres en la causa como es el supuesto extravío del expediente judicial caratulado: "BOLDU ROBERTO ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS", del Registro del Juzgado provincial antes mencionado, que al ser requerido por la Justicia Federal se determinó, al decir del abogado de la sucesión de los autos de referencia, doctor Jorge Rubén Salvucci, que el expediente obraba en poder de los herederos del causante (fs. 585); como también la razón por la cual Accastello suscribiere el escrito en el cual presta conformidad para la restitución del dinero en cuestión, cuando en definitiva era un simple autorizado para operar con esa caja de seguridad, y supuestamente ese dinero le correspondía a la herencia del padre de Boldú (fs. 93). Nótese al respecto que al tiempo de solicitar la apertura de la Caja de Seguridad en cuestión, en el formulario

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

preimpreso titulado: "MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CLIENTE PERSONA FÍSICA", firmado por el encartado, se consignó la siguiente leyenda: "llamar ➡ 0353-154013045 (Verónica)"; teléfono que conforme se pudo establecer con el devenir de la investigación, pertenecería a Verónica Navarro Alegre, que sería la pareja de Accastello (ver fs. 96). A lo que se suma la existencia de fajos de dólares estadounidenses bajo denominación serie 2006, cuando la causa que permitiría justificar aquel origen de los mismos, acaeció en el mes de julio de 2000, esto es a la muerte de su padre y posterior declaratoria de herederos ocurrida durante el mismo año.

Independientemente de todo lo expuesto, también estimamos necesario indicarle al Juez instructor que analice la posible conexión entre el lavado de activos que aquí se investiga con los hechos que investiga el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidos a la presunta comisión de ilícitos contra la administración pública, vinculados con desvíos de fondos nacionales y sobreprecios en la obra pública y que, a tenor de la postura del Ministerio Público Fiscal, sería el ilícito precedente al delito de lavado de activos aquí investigados.

En efecto, en términos generales y conforme las previsiones de los artículos 41, 42 y 43 del ordenamiento ritual, la prórroga de competencia por conexidad prevista a efectos de permitir la acumulación de causas por razones de economía procesal y **a fin de evitar pronunciamientos contradictorios**, tiene lugar en aquellos casos en que los hechos guardan un nexo o interdependencia en razón de las circunstancias o modalidades de ejecución en relación al tiempo, lugar y personas; por lo que en función de lo aquí

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

reseñado, aquella posibilidad deberá ser valorada también por el Juez "a quo".

Por último, advertimos que la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal (que anuló la sentencia de esta Sala en la que, ante la hipótesis del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Boldú y Accastello, declaró la incompetencia de este Fuero) se asentaba, a la luz del correspondiente recurso que lo motivó, en el posible delito de lavado de activos relacionada a la operatoria de la ex financiera CBI, sin mencionar la investigación llevada a cabo por CABA.

Por las razones que anteceden, entendemos que corresponde revocar el procesamiento, debiendo el Juez instructor completar la investigación, de conformidad a los lineamientos de esta Resolución. Sin costas (art. 530 y 531 del C.P.P.N.). **ASI VOTAMOS.**

La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela S. Montesi, dijo:

Puestos los autos a despacho de la Suscripta y analizadas las constancias de las presentes actuaciones, en particular los fundamentos expuestos por el Juez instructor en el auto bajo recurso y los argumentos sostenidos por la defensa, corresponde expedirme en orden a las cuestiones sometida a consideración del Tribunal.

1) En primer término, debo señalar que en lo que respecta a las cuestiones procesales y de carácter preliminar planteadas por la defensa, adhiero en términos generales a las conclusiones arribadas por los señores Jueces de Cámara del voto que antecede, expidiéndome también por su rechazo.

En efecto, en lo que concierne a la pretendida nulidad de los **allanamientos**, coincido con el voto que antecede en que el Juez ha expuesto de manera suficiente

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

los motivos que lo condujeron a la adopción de la medida, verificándose y habiendo mediado elementos objetivos que autorizaban dicho proceder.

Por otra parte, en cuanto a la invocada violación al **secreto fiscal**, comparto que corresponde el rechazo del planteo efectuado. Valoro particularmente que de la revisión de la causa y las constancias del Sistema de Gestión Judicial Lex100, surge que ni bien inician las actuaciones obra proveído de fecha 25 de agosto de 2015 titulado "decreto que ordena levantamiento de secreto fiscal".

En efecto, mediante proveído de fecha 25 de agosto de 2015 el Juez de primera instancia dispuso: *"A mérito de lo informado por el actuario, téngase por cumplimentado lo ordenado a fs. 1. Líbrese oficio a la Jefa de Investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dra. Nora Armesto, para que informe dentro de las 72 horas si el Sr. Fernando Enrique Boldú (DNI 20.495.470) y el Sr. Eduardo Luis Accastello (DNI 11.395.594), exteriorizaron en sus respectivas declaraciones juradas de impuesto sobre los bienes personales y/o impuestos a las ganancias la adquisición, tenencia y/o atesoramiento de doscientos noventa mil dólares estadounidenses (U\$S 290.000) desde el año 2009 al día de la fecha. Asimismo se le ordena la apertura de una fiscalización, verificación y/o inspección **en forma urgente** respecto de los nombrados, a los fines de establecer el origen de los fondos referenciados, los cuales han sido detectados en el marco de la investigación realizada en los autos "Rodrigo Eduardo y otros p.ss.aa. Asociación ilícita y otros" (Expte. 5650/2014). A tal fin deberá realizarse un control sistémico de los mencionados en cuanto a su condición y situación tributaria,*

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

facultándose al Organismo Recaudador a solicitar información de terceros independientemente de los requerimientos que puedan ustedes cursar, debiendo designar un comisionado de su confianza, a quien se le informará expresamente que deberá respetar el secreto de las actuaciones según lo establece el art. 204 del Código de Procedimientos en Materia Penal. Todo ello con noticia fiscal".

De tal modo, de las constancias de autos surge a las claras que la exigencia de contar con una disposición expresa se hallaba cumplimentada con el dictado del proveído de fecha 25.8.2015, en donde puntualmente el Magistrado valoró lo previamente certificado por el Actuario y dispuso el levantamiento del secreto fiscal, **solicitando informe y autorizando la apertura de una fiscalización, verificación e inspección a fin de llevar a cabo un control sistémico de la condición tributaria.**

De tal modo, el secreto fiscal fue debidamente levantado desde el inicio de las actuaciones, por lo que no existe violación a dicha garantía ni impedimento alguno para la incorporación legal y consideración de la información aportada.

En cuanto a la **excepción de falta de acción** deducida por la defensa, comparto también con los señores Jueces de Cámara preopinantes que el cuestionamiento efectuado no versa sobre cuestiones evidentes o palmarias, sino que se refiere a aspectos de hecho y derecho que hacen al fondo del caso, controvirtiendo incluso extremos de la imputación, motivo por el cual excede los límites de la excepción articulada.

Respecto el cuestionamiento a la duración del proceso, debo decir que **el plazo razonable** constituye un

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

concepto indeterminado, que deja abierto el camino para la amplitud interpretativa. Al intentar delimitarlo, la doctrina y jurisprudencia internacional ha coincidido en señalar que su determinación depende de otros elementos o factores tales como la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales (cfse. Yacobucci Guillermo, El sentido de los principios penales, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 2002, p. 353; Corte Interamericana de Derechos Humanos, causas "Genie Lacayo", S. 29.01.1997, y Suarez Rosero", S. 12.11.1997; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General de la O.E.A., Washington D.C., 1996, pp. 33 y ss.; Tribunal Europeo de Derechos Humanos - Jurisprudencia 1984-1987, B.J.C., Madrid, pp. 173, 949 y 1015).

En la ponderación del plazo razonable del proceso resulta imprescindible examinar las causas que han jugado en la dilación del mismo, a efectos de considerar si, de acuerdo a la naturaleza del objeto procesal, la excesiva duración ha obedecido a simples demoras perfectamente evitables, o si, por el contrario, habiéndose respetado el mandato de celeridad que pesa sobre los órganos de justicia, la tardanza es consecuencia de la complejidad y naturaleza de la causa.

En lo que concierne al caso de autos, se está frente a una causa compleja y de elevado volumen que ha implicado la adopción de un gran número de medidas y en donde se ha articulado una serie de planteos de distinta índole y recursos consecuentes, tratándose cuestiones de competencia y acumulación, todo lo cual ha implicado indefectiblemente la dilación en tramitación y el dictado de resolución.

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Cabe además mencionar que la causa data del año 2015 y que luego de un extenso derrotero procesal la acción penal referida puntualmente a los hechos aquí investigados fue promovida mediante requisitoria fiscal de fecha 10 de febrero de 2022, en base a la cual se receptó declaración indagatoria el 18 de febrero del mismo año.

Así, desde el inicio de la causa y hasta el día de la fecha, pese los planteos y cuestiones procesales suscitadas, el procedimiento se ha sustanciado con normalidad, practicándose la instrucción de la causa con la correspondiente producción de pruebas.

De tal modo, considero que la alegada demora no ha obedecido a la desidia o indiferencia de los Órganos judiciales intervinientes durante la sustanciación del proceso, sino que se ha debido justamente a la complejidad y naturaleza propia de la causa, lo que impide responsabilizar por ello de modo genérico a la Administración de Justicia como para hacer procedente la pretensión defensiva.

2) Resueltas de este modo los planteos preliminares, corresponde ahora adentrarse en el tratamiento de la cuestión de fondo y definir la situación procesal del encartado Fernando Enrique Boldú.

Al respecto, debo comenzar señalando que se atribuye al imputado la supuesta comisión de un presunto **hecho de lavado de activos** (conf. requerimiento fiscal de instrucción obrante a fs. 1157/8), cuya descripción no reiteraré por haber sido plasmada tanto en el auto bajo recurso como en el voto que antecede, a los cuales me remito.

Conforme los argumentos que han sido reseñados al comienzo de la presente resolución, **el Juez instructor**

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

entendió que en el presente caso se encontraban reunidos elementos suficientes que permiten señalar a Boldú como responsable del accionar ilícito endilgado, disponiendo su procesamiento, pronunciando este que ahora se ha puesto en crisis y que a continuación se tratará.

A los fines de analizar la cuestión traída a estudio del Tribunal, cabe precisar que **la defensa** -junto a otros cuestionamientos que han sido ya tratados- se agravió por entender que en la resolución apelada se deja de lado y se cuestiona la existencia de prueba dirimente, como lo es el escrito presentado en el Juzgado de la sucesión, sin que en ningún momento se haya declarado que la leyenda inserta, la firma y sello del Juzgado Civil sean falsos.

Que no hay investigación dirigida a la declaración de invalidez de dicho instrumento, el cual goza de fuerza de autenticidad, pero pese a ello, se ignoró deliberadamente su consideración.

Igualmente, sostuvo que se omite valorar en forma correcta la fiscalización e Informes Finales elaborados por AFIP-DGI, ordenados por el propio Tribunal interviniente, así como las declaraciones testimoniales del Supervisor Nelson Turrín y del Inspector Daniel Horacio Jaime de AFIP, que en forma categórica concluyen que Fernando Boldú acreditó la legitimidad del origen y la tenencia del dinero hallado en la caja de seguridad.

Agregó que el decisorio impugnado deja de lado prueba concluyente y categórica que exime de toda responsabilidad penal al imputado.

Expuestos en estos términos los fundamentos del Juez y los agravios de la parte recurrente, debo efectuar las siguientes consideraciones para la solución del presente caso, muchas de las cuales han sido ya plasmadas

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

por el propio Instructor en el auto bajo recurso, pero que a criterio de la Suscripta conducen a una diferente conclusión de la allí arribada.

En primer término, cabe considerar que receptada declaración indagatoria y puesto el imputado Fernando Enrique Boldú en conocimiento del hecho que se le atribuye (fs. 1164/5), el nombrado hizo uso de su facultad de declarar, manifestando que los dólares en cuestión, son el producido del trabajo profesional y comercial de su padre, quien falleció el día 9 de julio de 2000. Que posteriormente, en el año 2006, iniciaron la declaratoria de herederos e hicieron la manifestación de los bienes. Agregó, que llevan veintidós años de declaratoria y nunca hicieron partición, ni judicial ni particular, por eso utilizan indistintamente los bienes heredados, entre su madre y sus hermanos, y que él es el administrador designado. Además, expresó que ante la inspección de AFIP cumplió con los requerimientos, inicialmente lo hizo con las copias simples que tenía del expediente de declaratoria de herederos y luego con copias certificadas del expediente del tribunal civil, copias certificadas que acompañó a AFIP y al Legajo de Investigación ante la Fiscalía Federal N° 1. Que ante la AFIP se generó una Orden de Intervención que concluyó con un informe el cual fue revisado durante dos gestiones distintas de conducción de AFIP y ambas llegaron al mismo resultado: que se justificaba el origen de los fondos y se mandaba al archivo las actuaciones. Por lo tanto, niega los hechos acusatorios y entiende que está dado el marco de la justificación de los fondos.

En relación a lo declarado por el encartado, debo señalar que, conforme surge del propio auto bajo recurso, oportunamente se ordenó la apertura de una fiscalización a

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

los fines de establecer el origen de los fondos secuestrados en el marco del hecho intimado.

Así se indica que de las constancias de las actuaciones Cuerpo Principal O.I. 1383444 (acta de fs. 44) surge que el día 5 de noviembre de 2015, a las 11:30 hs., compareció el encartado Fernando Enrique Boldú ante la sede de AFIP-DGI División Fiscalización n° 4, ubicada en calle San Luis n° 92, 1° piso, de esta ciudad, el que fue atendido por el inspector Daniel Horacio Jaime. Ante dicho funcionario, Boldú expresó que adicionalmente a la documental aportada con anterioridad, respecto de los bienes que incluyera en sus declaraciones juradas de los períodos 2013 y 2014, **aporta documentación complementaria que justifica su tenencia, entre ellos, la suma de dólares estadounidenses trecientos mil (U\$S 300.000).** Que seguidamente exhibió ante el inspector original y aportó copia de las fojas 65 y 66 del expediente judicial caratulado: "BOLDU, Roberto Antonio-Declaratoria de Herederos", de las cuales se desprende que Fernando Enrique Boldú se presentó con fecha 6/6/2006 ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Río Segundo a fin de **informar los bienes que integran el patrimonio del causante, entre los cuales se encuentra la suma de dinero antes indicada** (v. copia a fs. 423).

Que tales circunstancias se corroboran luego en sede judicial por el inspector Daniel Horacio Jaime, quien manifestó que en la fiscalización realizó un requerimiento a Boldú para que aporte documentación y que ante la inconsistencia de la tenencia de dinero en moneda extranjera, primero se contactó telefónicamente con Boldú o su contador (Sedini), donde le comentaron que ese dinero era de una herencia, a lo que les manifestó que debían

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

acreditar con documentación. Así, Boldú -el 5/11/2015- le llevó el legajo de la sucesión, sacaron copias solamente de unos folios donde constaba la tenencia de una cifra un poco mayor en dólares y otros bienes y las agregó a las actuaciones administrativas (ver fs. 1136/7).

Además, conforme ha sido también expuesto por el Juez, Daniel Horacio Jaime fue consultado sobre si el día 5/11/2015 el imputado Bodú exhibió el original del expediente de declaratoria de herederos o sólo las fojas agregadas a las actuaciones administrativas, ante lo cual el nombrado respondió que era un expediente, con carátula y sellos, que no era fotocopia.

Cabe señalar en el punto que a fs. 45 del legajo del ente recaudador (O.I. 1383444) se encuentra agregada copia del escrito titulado "Hace presente-Infirma", con fecha de cargo 6/6/06, en el cual el encartado Fernando Boldú, en calidad de coheredero y coadministrador, comunica ante el Juez Civil y Comercial de la ciudad de Río Segundo en autos: "Boldú, Roberto Antonio-Declaratoria de Herederos", los bienes que integran el patrimonio de su extinto padre. Entre ellos, informa dos bienes inmuebles - uno en esta ciudad y el otro en la Localidad de Laguna Larga- y en el punto c. **"Dinero en efectivo: u\$s 300.000 (dólares USA)"**. Dicha circunstancia ha sido también valorada por el Juez instructor, quien agrega que en dicho escrito Fernando Enrique Boldú también informa que la guarda del patrimonio del causante se encuentra distribuida de la siguiente forma: el inmueble ubicado en esta ciudad detallado en el punto "a" corresponde a su hermano José Ignacio Boldú; el inmueble descripto en el punto "b" de la Localidad de Laguna Larga, a su hermana María Soledad

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Boldú; y el dinero en efectivo del punto "c", a él (v. copia a fs. 559 y vta.).

Ahora bien, ante el presunto extravío o sustracción del Expediente Judicial de la declaratoria de herederos de Roberto Antonio Boldú -padre del imputado- y la imposibilidad de cotejo, el Juez Federal interviniente pone en duda la veracidad del escrito y demás circunstancias previamente indicadas y con ello descree la versión exculpatoria del encartado.

Al respecto, debo señalar en primer término que no comparto el cuestionamiento que el Juez de primera instancia efectúa al imputado por la supuesta omisión de acompañar el expediente original -para poder así verificar la veracidad de las circunstancias-, a modo de **carga pública** para el encartado cuando no ha podido establecerse siquiera que el referido expediente estuviera efectivamente en su poder. De tal modo, estimo que no puede hacerse pesar sobre el imputado el hecho de haberse extraviado las actuaciones, debiendo suplirse su supuesta inexistencia física por otros medios.

En orden a ello, tal como ha sido descripto por el propio Juez en el auto aquí recurrido, el Juzgado Civil y Comercial de Río Segundo envió con fecha 10/3/2016 a la Fiscalía Federal N° 1 copias simples de los autos "Boldú, Roberto Antonio -Declaratoria de Herederos", Expte 2528780, extraídas de las copias simples acompañadas en "Para Agregar", por el heredero Fernando Enrique Boldú (fs. 587). Luego, con fecha 28/04/2016 el Juzgado procedió a reconstruir el expediente en cuestión ingresando al Sistema de Administración de Causas (SAC) con el n° 2757726 (v. informe de fs. 925 y vta.).

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Así, a fs. 599/676 de autos, obran agregadas **copias simples** de las piezas procesales del expediente de declaratoria de herederos de Roberto Antonio Boldú, en las que a fs. 65 y vta. (fs. 666 del presente) luce el escrito de denuncia parcial de bienes, entre los cuales se encuentra la suma de U\$S 300.000.

También, a fs. 677/81 se hallan glosadas **copias que concuerdan con el original** de una nueva denuncia de bienes de fecha 1/12/2015 y del escrito presentado por Fernando Enrique Boldú el día 4/3/2016 por el que contesta el emplazamiento del Tribunal para que devuelvan el expediente de la declaratoria, **manifestando que el mismo no obra en poder de los herederos** y presentando las copias simples de las actuaciones (hasta fs. 66), como el original del escrito mencionado, ingresado el 1 de diciembre de 2015.

Asimismo, el Juzgado Civil de Río Segundo envió **copias certificadas** del auto de fecha 1/11/2000 que declara los herederos únicos y universales de Roberto Antonio Boldú y la resolución de fecha 9/6/2005 que rectifica la anterior por un error material respecto al nombre del causante (fs. 590/3).

De tal modo, obran en autos constancias documentales que dan cuenta de la tenencia del dinero por parte del imputado y la justificación del origen lícito del mismo.

A dicha prueba documental, cabe agregar el antes referido testimonio de Inspector Daniel Horacio Jaime en torno a la exhibición de las constancias por parte del encartado, como así también del Supervisor Nelson Turrín sobre la misma situación. Si bien hay algunas discrepancias en dichos testimonios respecto si se exhibió original o

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

copias del expediente, concuerdo con la defensa que ambas versiones acreditan prima facie la presentación de las constancias y no constituyen un indicio en contra del imputado, sino que por el contrario dan credibilidad a su versión defensiva.

Recuérdese que el imputado expresó que cumplió con los requerimientos de la inspección de AFIP, presentando inicialmente **copias simples** del expediente de declaratoria de herederos y que luego lo cumplimentó con **copias certificadas** del expediente del Tribunal Civil, que fueron agregadas por AFIP y acompañadas al Legajo de Investigación ante la Fiscalía Federal.

Debo señalar que aun cuando se hubieren acompañado copias y no originales, no se advierte por qué ello debiera influir negativamente contra Boldú, cuando -como lo indica el recurrente- ninguno de los intervinientes en la declaratoria de herederos ha puesto en duda la veracidad de las actuaciones, más allá de la actual imposibilidad de cotejo.

Luego de estas consideraciones, la mayoría de las cuales han sido valoradas por el propio Juez Instructor en la resolución apelada, no logro vislumbrar por qué motivo se deja de lado la versión exculpatoria del encartado y se cuestiona prueba dirimente que acreditaría y justificaría la tenencia de los fondos por parte del encartado, todo lo cual encuentra sustento documental y testimonial obrante en autos.

En efecto, tal como lo expone la defensa, el dictamen de la AFIP en la orden de intervención N° 1383444 concluye que el contribuyente justifica el origen y tenencia de la suma de U\$S 290.000 y que el contribuyente aportó copia certificada por el Juzgado Civil, Comercial y

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

de Familia Sec. 2 de Río Segundo del expediente judicial de autos "BOLDU ROBERTO ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS", surgiendo de la documentación aportada su autenticidad.

Cabe recordar que la Suscripta -en voto conjunto con el Dr. Eduardo Ávalos- en oportunidad de expedirse sobre la competencia en autos **"LEGAJO DE INVESTIGACIÓN de Dr. Enrique José Senestrari por Asociación ilícita en concurso real con inf. Art. 310 - incorporado por ley 26.733 en concurso real con Defraudación por retención indebida y otros"** (Expte. N° 5650/2014/51/CA33), luego de haber estimado que se habían realizado medidas de prueba con suficiencia, sostuvo que *"...el órgano acusador señala que fue la misma AFIP quien entendió que Fernando Boldú había justificado el origen de los dólares hallados en la caja de seguridad, haciéndole rectificar las declaraciones juradas de los impuestos sobre los bienes personales y ganancias..."* (el resaltado es propio). Se señaló, asimismo, que *"...el informe Final de Inspección de fecha 17 de mayo de 2016, concluye que Fernando Enrique Boldú justificó el origen y tenencia de la suma de U\$S 290.000, cuales se encuentran en custodia en una caja de seguridad de la firma CBI, que conforme a Oficio judicial mencionado, tendría el contribuyente en su poder a partir del año 2009; presentando como consecuencia de la acción de fiscalización de las DD.JJ del Impuesto sobre los Bienes Personales Rectificativas de los períodos 2006, 2007, 2013 y 2014 y Originales de los períodos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 exteriorizando su patrimonio..."*.

Considero así que, dadas las constancias obrantes en autos, la postura de sospecha e incredulidad adoptada por el Juez de primera instancia no goza de sustento en la realidad, debiendo destacarse que no consta la declaración

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

de invalidez de la prueba acompañada por el encartado en el marco de la inspección efectuada a su respecto, gozando a su vez de soporte en prueba testimonial, siendo la Suscripta de opinión que una correcta valoración del plexo probatorio existentes conduce a desvincular al encartado del hecho intimado.

De tal modo, comparto con la parte recurrente que lo único que ha podido acreditarse hasta aquí es que el imputado Fernando Enrique Boldú contrató una caja de seguridad, que autorizó a Eduardo Accastello a utilizarla, y que en el interior de la misma se encontraron doscientos noventa mil dólares estadounidenses, suma esta que encuentra asidero en el acervo hereditario del imputado conforme ha sido antes indicado y sin que surjan indicios sobre la comisión del hecho ilícito intimado.

Hago aquí un paréntesis y me detengo a señalar no puede interpretarse negativamente que Boldú hubiera autorizado el acceso a la caja de seguridad a Eduardo Acastello y no a sus propias hermanas. Al respecto, debo señalar en primer lugar que nada impide la apertura de cajas conjuntas o el libramiento de autorizaciones a terceros, siendo ello una práctica habitual que no puede meritarse en contra del encartado si no está acompañada de otros elementos que reflejen una actividad delictiva.

Por otra parte, la explicación respecto de la falta de autorización a sus propias hermanas surge del propio escrito aportado con fecha 5/11/2015 por Boldú y que ha sido citado por el Juez instructor, donde el encartado informa que la guarda del patrimonio del causante se encuentra distribuida de la siguiente forma: el inmueble ubicado en esta ciudad detallado en el punto "a" corresponde a su hermano José Ignacio Boldú; el inmueble

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

descripto en el punto "b" de la Localidad de Laguna Larga, a su hermana María Soledad Boldú; **y el dinero en efectivo del punto "c" a él** (v. copia a fs. 559 y vta.), en base a lo cual nada motivaría el acceso de sus hermanas a dicha suma.

Plasmado ello, entiendo que no se valoran correctamente los informes finales de inspección y fiscalización de AFIP ordenados por el propio Tribunal, como así también las declaraciones testimoniales brindadas en torno a los mismos, la cuales -más allá de leves discrepancias- concluyen en que Fernando Boldú acreditó la legitimidad del origen y la tenencia del dinero incautado.

No ha podido acreditarse que el imputado hubiera simulado ni que confeccionara de manera fraudulenta un escrito para ser luego presentado ante los órganos pertinentes a fin de justificar la tenencia de dinero, quedando ello meramente en el plano conjetural y sin respaldo en los elementos probatorios incorporados al proceso.

De tal modo, luego de una extensa instrucción no puede aquí sostenerse la procedencia ilícita del dinero, ni ha podido acreditarse la existencia de un ilícito precedente que tuviera vinculación con el dinero incautado, lo cual me impide tener por configurado el hecho imputado y me conduce a un estado intelectual que amerita descartar la hipótesis delictiva y pronunciarse por la **desvinculación del encartado del proceso**.

Recurro nuevamente al precedente **"LEGAJO DE INVESTIGACIÓN de Dr. Enrique José Senestrari por Asociación ilícita en concurso real con inf. Art. 310 - incorporado por ley 26.733 en concurso real con Defraudación por retención indebida y otros"** (Expte. N° 5650/2014/51/CA33)

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

donde junto al Dr. Eduardo Ávalos consideré que *"En lo que concierne al delito de lavado de activos, art. 303 inc. 3° del C. Penal, tal como lo manifiesta el Fiscal, no se ha podido acreditar, hasta el momento, la existencia del delito precedente, lo cual constituye presupuesto del delito de lavado de dinero referenciado.*

Recuérdese que para este delito, el hecho intimado deberá contener al menos, las circunstancias de tiempo, lugar y personas en que habría sucedido el delito que le precede".

Hago hincapié en que ha transcurrido un término más que prudencial de investigación sin que se vislumbren -a mi criterio- medidas que vayan a modificar el estado de situación actual y más allá de estimar que la prueba autoriza a sostener la falta de responsabilidad de Boldú por el hecho intimado, me permito también señalar que con justeza se ha dicho que *"puede ocurrir que una vez agotadas las investigaciones, el tribunal (...) no obtenga certeza para dictar el sobreseimiento, ni tampoco pueda obtener o mantener el mérito necesario para provocar la elevación de la causa a juicio. El mérito para la elevación estará ausente cuando la falta de mérito decretada a favor del imputado, o su estado de duda, se mantiene hasta el final..."* (conf. Clariá Olmedo, citado por Navarro-Daray en "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, 4ª edición actualizada y ampliada, T. II., Buenos Aires, año 2010, pág. 616).

En tales casos, el estado jurídico de inocencia, reconocido y tutelado constitucionalmente, reclama la solución desincriminatoria, en aplicación del principio *favor rei*. Vale aclarar, ello procede cuando no fuere

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

razonable preveer la incorporación de nuevas pruebas con virtualidad para modificar dicho estado intelectual y su mantenimiento ponga en jaque la garantía de **juzgamiento en plazo razonable** a efectos de que se resuelva la situación procesal del imputado en forma definitiva (conf. arts. 18, CN; 8.1 y 8.2., CADH; y 3.c, 14.1 y 14.2, PIDCP, en función del art. 75, inc. 22, CN), siendo ello lo que acontece en el presente caso y que me conduce a resolver de manera definitiva la situación procesal del imputado, dictando su sobreseimiento.

En conclusión, conforme el plexo probatorio valorado y teniendo en cuenta que la investigación se encuentra avanzada sin que se avizoren nuevas medidas, considero que debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Fernando Enrique Boldú y disponerse su sobreseimiento. Ello toda vez que la continuación indefinida del proceso en este estado intelectual y probatorio vulneraría el derecho a obtener un pronunciamiento acorde a la presunción de inocencia en tiempo oportuno.

En virtud de todo lo expuesto, considero que debe revocarse la resolución dictada con fecha 8 de julio de 2022 por el Juez Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso el procesamiento de **Fernando Enrique BOLDU** como supuesto autor del delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1° del CP.), debiendo disponerse su **sobreseimiento por el hecho intimado** (art. 336 inc. 3 del CPPN.), con la expresa declaración que el presente proceso no afecta el nombre y honor de que hubiere gozado el imputado. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así voto.

Por ello,

SE RESUELVE:

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1554/2022/CA1

Por unanimidad

I.- RECHAZAR los planteos efectuados por la defensa en relación a la nulidad del allanamiento, violación del secreto fiscal, falta de acción y plazo razonable.

Por mayoría

II.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 8.7.2022 por el Juez Federal N° 3 de Córdoba en cuanto dispuso el procesamiento del imputado **Fernando Enrique Boldú (DNI 20.495.470)**, en orden al delito de lavado de activos en calidad de autor (cfme. art. 303 inc. 1 y 45 del CP), debiendo el Juez instructor completar la investigación de conformidad a los lineamientos brindados en esta Resolución.

III.- Sin Costas (art. 531 CPPN).

IV.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.-

LILIANA NAVARRO
JUEZ DE CÁMARA

GRACIELA MONTESI
JUEZ DE CÁMARA
(en disidencia parcial)

EDUARDO AVALOS
JUEZ DE CÁMARA

CELINA LAJE ANAYA
SECRETARIA DE CÁMARA

Fecha de firma: 09/11/2023

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36191708#360472764#20231109123342839